

ca.—Con fundamento del artículo 101 de la misma, se decreta; Primero: que se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 26 de Julio del presente año, que declaró haber lugar al amparo federal. Segundo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Lic. Emeterio Róbles Gil, contra la providencia dictada por el Magistrado de la 4ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, que dispone se suspenda la escuela del juicio que patrocina hasta tanto no haya satisfecho el derecho de patente. Tercero: devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca. Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Aarteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 26 de 1873.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

COMPETENCIA

Promovida por el C. Juez primero de Distrito de México al primero de lo Civil, para conocer del juicio hipotecario seguido por Don Cayetano Rubio, contra el Doctor Don José de la Sancha y Céspedes.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que en 3 de Abril próximo pasado, el Lic. D. José María Carbajal en representacion del Doctor D. José María de la Sancha y Céspedes, se presentó

al Juzgado de Distrito manifestándole, que por escritura de 31 de Mayo de 1850, el referido Céspedes reconocía sobre sí la hacienda de Texcaltitla situada en el Estado de Hidalgo, la cantidad de \$ 7.448,50. impuestos á favor de la Parroquia de Zanguilucan, cuyo capital fué redimido por Sancha y Céspedes, en el mes de Marzo de 1854: Que en 1866 le fué cobrado aquel capital por la sub-agencia de bienes nacionalizados de Tulancingo, lo cual dió lugar á que Sancha y Céspedes, despues de acreditar el pago, obtuviera una ciden para la cancelacion de la escritura de imposicion, y que por último, no obstante esta circunstancia, el C. Agustin Cosío denunció el capital de que se ha hecho mencion, y habiendo obtenido se le admitiera la redencion segun las leyes de Reforma, se subrogó, como denunciante, en lugar del Supremo Gobierno. investido ya de ese carácter ha demandado ya en principio hipotecario y ante el Juez primero de lo civil de esta Capital, el pago de los \$ 7.448 50. de que se ha hecho referencia.

En vista de esta demanda, el Lic. Carbajal, como patrono del Doctor Sancha y Céspedes, ocurrió al Juez primero de Distrito, á fin de que librara oficio inhibitorio al Juez primero de lo civil para que se abstuviera de conocer en la demanda de Cosío. El Juez de Distrito, previa la audiencia fiscal, y por auto de 9 del citado Abril, dirigió la inhibitoria que se le había pedido, la cual fué contestada en 9 del siguiente mes, y de cuya contestacion aparece, que el Juez de lo civil sostiene su jurisdiccion. Resultando de esas diligencias, la presente controversia de jurisdiccion que hoy se somete á la resolution de esa primera Sala.

El Fiscal al examinar esta cuestion, ha tenido que fijarse en el carácter de la demanda: segun está, el demandado no es otro que un simple particular, y quien le demanda es un particular tambien, ya sea Don Agustin Cosío, ya sea Don Cayetano Rubio cesionario del primero: estos dos litigan so-

bre preferencia de derecho el capital impuesto en la hacienda de Texcaltitla. Uno y otro reconocen y fundan su accion en título que adquirieron del Gobierno; pero sin tocar para nada este, debaten entre sí su buen derecho. De manera que bien visto, hasta ahora el Gobierno no está demandado ni se tiene con él ninguna disputa. Tal vez mas tarde se dirija la accion contra el Erario federal, pero ahora no se ha hecho.

Planteadas así la cuestion, es facil resolverla. En efecto, tanto el artículo constitucional como las diversas leyes y disposiciones que cita el Juez primero de Distrito en apoyo de su jurisdiccion, parten del equivocado supuesto de que la federacion está interesada. Pero ese interes no existe realmente, y por lo mismo no existiendo ese supuesto, los argumentos y razones que en él se fundan, resultan inaplicables.

El Fiscal podía estenderse razonando bajo este sentido; pero le parece mas oportuno no recordar algunas disposiciones de esa primera Sala en las que se ha fijado con bastante precision y claridad, y con arreglo á derecho, el verdadero sentido en que debe tomarse el artículo 97 de la fraccion tercera de la Constitucion federal, y demas leyes que hablan de las competencias de los Tribunales federales, sobre todo en cuestiones suscitadas entre particulares, á consecuencia de las leyes de Reforma sobre nacionalizacion.

Teniendo en primer lugar el fallo de esa primera Sala de 8 de Julio de 1871, y obra á fojas 34 del Semanario Judicial, tomo segundo, parte segunda, y mas recientemente la determinacion de 8 de Noviembre de 1872, negocio de Garay con Calatayud. En esos negocios se ha tomado en consideracion, que la cesion que el Gobierno ó la Nacion hace de sus derechos, no importa la cesion tambien del fuero, sino la facultad de adquirir la cosa cedida, cuyo dominio se trasfiere, y que consumada una vez la cesion, el Fisco deja de tener interes en la cosa cedida, interes que ya es materia exclusiva de

los cesionarios; resultando de todo, que el Fisco no tiene que litigar en ese caso, y de consiguiente, no litigando ni como actor ni como reo, no hay motivo para ocurrir á los Tribunales federales.

En esta virtud, y por los propios legales fundamentos en que se apoya el Juez primero de lo civil de México en su respectivo informe, el suscrito concluye con la siguiente proposicion. Unica: Se declara: que el Juez primero de lo civil de México, es competente para conocer del juicio hipotecario promovido por Don Cayetano Rubio, con motivo del capital de \$ 7,448 50. que reconoce la hacienda de Texcaltitla.

México, 3 de Octubre de 1873.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 17 de 1873.—Vista a competencia promovida por el C. Juez primero de Distrito al primero de lo civil del mismo, para conocer del juicio hipotecario seguido por D. Cayetano Rubio, contra el Dr. D. José de la Sancha y Céspedes; lo pedido por el Sr. Fiscal; oído lo alegado al tiempo de la vista por el Lic. Alfaro en favor de la jurisdiccion del Juez primero de lo civil, y por el Lic. Romero, en la del Juez primero de Distrito, con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino. Considerando: que segun el artículo 97 de la Constitucion federal y demas leyes concordantes, los tribunales de la Federacion solo son competentes para conocer de los negocios en que ella fuere parte, ya litigando como actora, ó bien escepcionándose como demandada. Que fuera de esos casos y en los demás pleitos, los tribunales del fuero comun son los competentes para conocer de ellos. Que en el seguido por D. Cayetano Rubio, contra el Doctor de la Sancha y Céspedes, la Hacienda federal no tiene por ahora ningun interés, pues que la demanda se

ha interpuesto directamente contra un particular del que exclusivamente se exige el cumplimiento de las obligaciones que entraña la escritura de 31 de Mayo de 1850, y obra á fojas 1 del cuaderno principal, del Juzgado primero de lo civil, en cuyo título funda el actor su acción hipotecaria; de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal y por los propios legales fundamentos en que se apoya su respectivo pedimento, se declara.

Primero: Que el Juez primero de lo civil de esta capital es competente para seguir conociendo del juicio hipotecario promovido por D. Cayetano Rubio, contra el Doctor D. José de la Sancha y Céspedes.

Segundo: Remítanse las actuaciones al mencionado Juez primero de lo civil, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; remítase copia igual al primero de Distrito; hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.—Pedro Ogasón.—M. Auza.—Ignacio Ramírez.—Simón Guzmán.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Noviembre de 1873.—*Emilio Ordaz*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros, por D. Eugenio Armendaiz, por sí y á nombre de su hermano D. Francisco Armendaiz, contra el cobro que les hace la Aduana Marítima de este puerto, del impuesto federal denominado derecho de bultos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Administrador de la aduana Marítima y Frontera

de este puerto detuvo, con su caracter oficial, al representante de la casa mercantil que tiene en esta plaza el C. Francisco Armendaiz, 75 barriles de harina, sustituidos despues con indianas, por cobrarle trecientos veinticuatro pesos siete centavos, por derechos de bultos sobre las mercancías importadas con el permiso número 7.

De este acto ha pedido amparo el apoderado y gerente de dicha casa: el Sr. Administrador rindió sobre él el informe con justificación que se le pidió, y esta promotoría va á evacuar el traslado prevenido por la ley, sobre ese recurso interpuesto.

Ha asentádose por el quejoso, que su acción la motiva aquel acto con el cual el C. Administrador ha violado los artículos 16 y 27 de la Constitución en la persona que representa, y ha asentado también que ha violádolos, por que no ha debido atacarlo su propiedad ni molestarle con exigirle el derecho de bultos á mercancías extranjeras que importó el 5 del próximo pasado mes, para el consumo de la Zona existente en esta frontera.

Hoy no se trata de si debió ó no cobrarse el derecho de bultos creado por la ley de 19 de Noviembre de 1867, á las mercancías extranjeras importadas por las aduanas de esta frontera, durante el régimen del arancel de 31 de Enero de 1856, por que lo exigido y dado se considera como un hecho ya consumado, que nadie promueve ni reclama; por que el comercio de ese entonces se prestó dócil sin discusión y sin protesta á satisfacerlo, cualquiera que fuese la razón que lo impulsara á cumplir la ley general explícita que lo imponía en sustitución del peage, y que al crearlo, el legislador no hizo distinción alguna de aduanas, ni excepción á las de la Zona: y por que cuanto ahora se dijera en cualquiera sentido, sería inoficioso y extemporáneo, sino que la cuestión de hoy que se agita es: si desde que comenzó á regir el nuevo arancel de 19 de Enero de 1872, debe seguirse cobrando ó no, á las importaciones, ese derecho de bultos.